

Brasil, Jair Bolsonaro y el COVID-19

Alexandre Fuccille | Profesor de la Universidad Estatal Paulista (UNESP).

Tema

Este documento analiza los impactos y perspectivas de futuro de Brasil y de su presidente Jair Bolsonaro ante el COVID-19.

Resumen

La pandemia del coronavirus (COVID-19) y la postura negacionista del presidente Jair Bolsonaro han cambiado de forma acelerada el escenario político brasileño. Este análisis revisa los impactos de la postura del mandatario de la mayor y más importante nación latinoamericana y sus consecuencias en el campo económico, en el ámbito federativo, con el Congreso, con el ministro de Sanidad, la prensa y los militares, siendo posible percibir que se avecinan días muy duros y difíciles para la gobernabilidad.

Análisis

“*Estamos diante do maior desafio da nossa geração*”. Con estas palabras, pronunciadas en un discurso en “cadena nacional” el último 31 de marzo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro parecía estar haciendo las paces con la realidad y abandonando sus proclamas sobre el COVID-19, como si este fuera una cosa menor. De este modo modificaba la posición negacionista anterior, que clasificaba la pandemia del coronavirus como una “gripecilla” o un “resfriadito”, al tiempo que afirmaba “¿Algunos van a morir? Van a morir. Lamento, lamento, esa es la vida, es la realidad”. También explicaba que sus conciudadanos no se contagiaban con frases tan esdrújulas estrambóticas como esta: “el brasileño no se contagia porque es capaz de bucear en una alcantarilla y no le pasa nada”. De esta forma el líder brasileño parecía converger con otros líderes populistas como Donald Trump y Boris Johnson que cambiaron sus posiciones iniciales. Demasiado tarde, sin embargo, el caos político ya estaba sobre la mesa.

Bolsonaro y la economía

Bajo el mantra “la histeria daña la economía”, Bolsonaro se ha posicionado en contra de las medidas de aislamiento social. Su abierta oposición ante las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llevado a un fuerte deterioro y corrosión de su capital político. El 15 de marzo, regresado de EEUU y con parte de su comitiva habiendo contraído el COVID-19 en el aquel país, contrariando el equipo médico de la Presidencia y su ministro de Sanidad, el presidente estimuló y participó de protestas en Brasilia con centenas de personas en contra del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo. Su gesto fue clasificado, además de antidemocrático, de “irresponsable” por diputados y adversarios políticos, pero Bolsonaro continuaba disfrutando de gran apoyo en parte importante del empresariado, en especial del

segmento de servicios que empezaban a ver sus actividades económicas reducidas tras el inicio de la propagación del virus en el gigante sudamericano.

El 17 de marzo, después de reiterar de nuevo en un discurso que “este virus trajo cierta histeria”, empezaron en las principales capitales del país cacerolazos de rechazo que siguieron por más de una semana. En paralelo, los gobernadores de São Paulo y Rio de Janeiro (económicamente los más importantes estados del país) y precandidatos a la presidencia en las elecciones de 2022, João Doria y Wilson Witzel, respectivamente, comunicaban medidas de aislamiento como suspensión de clases en escuelas y universidades, cancelación de eventos, cierre del comercio, museos y otras medidas de distancia social.

En el último fin de semana de marzo, grupos bolsonaristas organizaron actos y manifestaciones en diferentes partes de Brasil pidiendo el fin del aislamiento. El líder ultraderechista salió a las calles de Brasil con comparecencias públicas y saludando a personas en actividades laborales. Sin embargo, a la semana siguiente se produjo un nuevo revés cuando la Justicia prohibió la campaña gubernamental anti-confinamiento denominada por el gobierno federal “Brasil no puede parar”. Bolsonaro se quedaba sin aliados institucionales.

Partiendo del diagnóstico de que “si la economía se hunde, termina mi gobierno”, Bolsonaro no ha dudado en intentar mantener la economía funcionando a costa de negar la pandemia. No obstante, de una expectativa previa de una subida del PIB próxima al 2,5% en 2020, las previsiones oficiales actuales ya indican al menos un crecimiento nulo para 2020. Sin embargo, el pronóstico de la Fundación Getúlio Vargas/FGV es de una contracción del 4,5% (con riesgo de seguir sintiendo efectos negativos “significativos” hasta 2023). Las pocas medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno caminan en la dirección de minimizar las pérdidas para las empresas y reducir el impacto de la crisis para ellas, por ejemplo, flexibilizando las regulaciones laborales durante el estado de calamidad pública, pero con pocas acciones orientadas a procurar el bienestar general de la población.

La única legislación que hasta ahora se ha votado en el Congreso, buscando proteger del impacto económico del confinamiento a una población con más del 40% de trabajadores informales, surgió de una propuesta de los partidos de la oposición: la renta mínima de emergencia. Son poco más de 100 euros mensuales que el gobierno dará durante el periodo de pandemia a cada familia de bajos ingresos. La propuesta final fue mejorada por el Congreso, ya que el texto inicial del gobierno sólo se acercaba a los 35 euros mensuales. El 7 de abril, el primer día que fue posible inscribirse para recibir el beneficio, más de 15 millones de personas se registraron en pocas horas.

Tras ese cuadro, según números del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), cabe recordar algunos datos que tienden a agravar los efectos de la pandemia en Brasil: 31,5 millones de brasileños (el 15% de la población) no tiene acceso a agua potable a través de la red general de abastecimiento; 75 millones (el 36% de la población) vive en áreas sin alcantarillado; y 6 millones no tienen baño en su casa. Como se ve, el mínimo acto básico de lavarse las manos para evitar la propagación del virus no es trivial para muchos millones de brasileños. Al mismo tiempo, otros 12 millones de

personas (el 5,6% de la población) vive en residencias donde se agolpan más de tres personas por habitación, un hecho considerado insalubre. Por tanto, en estas condiciones resulta complicado mantener la distancia social que el confinamiento impone.

Tal situación, combinada con un brusco bajón en el índice de confianza del empresariado industrial (más del 10%, la mayor caída desde la huelga de los camioneros en 2018), hizo que voces muy conocidas y respetadas del liberalismo económico –como Arminio Fraga (ex presidente del Banco Central durante la gestión Fernando Henrique Cardoso), Claudio Ferraz (profesor de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, el más destacado centro brasileño de formación de economistas liberales) y Cândido Botelho Bracher (presidente del mayor banco latinoamericano, el Itaú Unibanco)– criticaran unánimemente la conducción económica de la crisis. Igualmente, André Lara Resende (economista con un doctorado del MIT y uno de los padres del *Plan Real*) dijo que el otrora festejado ministro de Economía, Paulo Guedes, se basaba en “un liberalismo primitivo”.

Todos ellos apuntaron a que si no se aplicaba un estricto aislamiento social, el sistema de salud pública brasileño (el SUS, Sistema Único de Salud, el mayor sistema público universal de salud del mundo) se derrumbaría y la recuperación económica sería más lenta y dolorosa. Incluso, este comportamiento que parece pelear con la realidad llevó a la prestigiosa publicación británica *The Economist* a llamar al presidente de la octava economía del mundo “BolsoNero”.

Bolsonaro y los gobernadores

Un capítulo aparte que impacta directamente en las condiciones de gobernabilidad y el futuro del mandatario brasileño y del país pasa por su complicada relación con los gobernadores de los estados de la Federación. Ante la inacción del gobierno de Brasilia, estos gobernadores tomaron la delantera, decretando sus propias medidas de aislamiento. Los gobernadores rechazaron la exhortación de Bolsonaro para que los estados no decretasen medidas de confinamiento, calificando su propuesta de reabrir escuelas y empresas de no apropiada y alejada de la realidad y criticando dura y públicamente que su postura iba en contra de las recomendaciones de los expertos nacionales e internacionales de salud. Bolsonaro, en guerra abierta contra todos ellos, destacaba: “[los gobernadores] están tomando medidas extremas que no están a su alcance... el comercio está detenido y la gente no tiene nada para comer”. “El medicamento debe ser proporcional (a la enfermedad), o mata”.

Durante una tensa videoconferencia a finales de marzo con los gobernadores de la Región Sudeste, la más rica y poblada del país, donde están los estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo, fue explícito el malestar con el presidente, llegando esta tirantez a su punto culminante cuando Bolsonaro se refirió a João Doria a gritos: “¡a usted se le subió a la cabeza la posibilidad de ser presidente... No tiene altura para criticar al Gobierno Federal!”, a lo que Doria respondió: “le pido que tenga serenidad, calma y equilibrio. Usted tiene que comandar el país”, asegurando que apelaría a la Justicia si el Gobierno confiscaba equipos o material médico o trabara de algún modo sus acciones frente a la crisis sanitaria.

Doria continuó: “Estamos aquí los cuatro gobernadores del Sudeste por respeto a Brasil y en respeto al diálogo, pero usted como presidente tiene que dar el ejemplo, tiene que liderar y no dividir”. Minutos antes, Bolsonaro había calificado a Doria, su ex aliado durante la campaña electoral de 2018, de “demagogo” y días atrás de “lunático”, al igual que había insultado al gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, también antiguo aliado. Doria destaca con gran potencia política en este momento, asumiendo el liderazgo de los gobernadores, recibiendo incluso elogios del ex presidente opositor, Lula, por su comportamiento. Hombre fuerte del PSDB, está aprovechando esta crisis para aumentar su popularidad y mejorar su posición de cara a las elecciones de 2022.

El diálogo con los gobernadores de otras regiones tampoco fue más útil. “No hay más diálogo con este hombre. Las cosas han llegado a su fin”, afirmó Ronaldo Caiado, médico, importante líder del agronegocio y gobernador de Goiás (Región Centro Oeste), que en 2018 apoyó decididamente, y desde el principio, la campaña electoral de Bolsonaro. Caiado, como la mayoría de los gobernadores, ha ordenado unilateralmente estrictas medidas para evitar la propagación del coronavirus en su estado. El Tribunal Supremo ratificó esta semana las medidas contra el coronavirus ordenadas por los gobernadores e impugnadas por el mandatario. Sólo aquellos de estados pequeños o de poca significación económica como Mato Grosso, Rondônia y Santa Catarina, siguieron a Bolsonaro, reabriendo parcialmente el comercio. Encuestas como las de Datafolha, IBOPE, Vox Populi y MDA muestran una popularidad creciente de los gobernadores, con un promedio de aprobación de bueno/optimo, el doble del presidente.

Los gobernadores estatales y los alcaldes de las ciudades han asumido el papel protagonista de la gestión de esta crisis, enfrentándose a Bolsonaro, incluso aquellos que le habían apoyado desde el inicio, sumándose al grupo de gobernadores del nordeste que tradicionalmente ha sido la oposición más consistente al presidente. La pérdida de influencia en territorios neurálgicos como São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, cuyos tres gobernadores fueron elegidos en 2018 tras la estela de Bolsonaro, demuestra una gran fragilidad institucional.

Bolsonaro y el Congreso

Tras la Constitución Federal de 1988 quedó consolidado en Brasil el “presidencialismo de coalición”, cuyo elemento a destacar es que los gobiernos deben formar coaliciones con multitud de partidos políticos, dividiendo entre ellos las carteras ministeriales. El presidente Bolsonaro rompió totalmente con esta forma de construir la gobernabilidad. Así, sin mayoría parlamentaria desde el inicio del gobierno, el capitán retirado del Ejército procuró valerse de su capital político y un congreso mayoritariamente conservador para aprobar sus reformas y garantizar el funcionamiento de su administración, en una apuesta para muchos peligrosa y de eficacia dudosa.

Con menos de un año de mandato, Bolsonaro abandonó el Partido Social Liberal (PSL), por el cual fue elegido. Actualmente permanece sin partido político. Como si no bastase el enfrentamiento constante que mantiene con el Congreso durante esta pandemia, el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido su tradicional tono beligerante y poco conciliador. De este modo, el Parlamento, acompañado por el Poder Judicial, ha asumido un papel protagónico sin precedentes, aunque deliberando por medio de

sesiones virtuales. Diariamente desde el Palacio do Planalto, la sede del gobierno, se insulta a diputados federales y senadores, a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal y a ciertos ministros del Tribunal Supremo. Estos insultos parten de Bolsonaro y su *entourage* radical, surgido de las huestes bolsonaristas y también del conocido como “Gabinete del Odio”.

El llamado “Gabinete del Odio” es el núcleo más próximo al presidente, que elabora su estrategia de comunicación, tanto en sus apariciones y declaraciones públicas, como en las redes sociales. El grupo tiene carácter informal, pero produce informes y *fake news* y maneja las redes sociales con una gran actividad. Está comandado por Carlos Bolsonaro, el segundo hijo del presidente (quien lo considera “su *pitbull*”), concejal del ayuntamiento de Rio de Janeiro, con despacho en el Palacio do Planalto y quien, a pesar de ostentar una simple concejalía, suele participar en reuniones de alto nivel, con ministros y gobernadores.

El protagonismo y el tono permanentemente agresivo de este grupo, que siempre ataca al Congreso Nacional, descalificando la “vieja política”, ha sido un obstáculo en las votaciones de reformas económicas y continúa siendo uno de los grandes impedimentos para una relación positiva con los parlamentarios. Durante la crisis del COVID-19 el “Gabinete del Odio” continúa asumiendo la comunicación de Bolsonaro, creando cada vez más problemas incluso con los poderosos presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre. Bolsonaro provocó a los dos diciendo: “estimado Davi, estimado Rodrigo, salid a las calles y mirad cómo os reciben. Los acuerdos no tienen que ser entre nosotros, en oficinas con aire acondicionado. Tienen que ser entre nosotros y la gente”, a lo que los jefes del Legislativo afirmaron que el país necesitaba un “líder serio”. En resumen, en este estado de orfandad parlamentaria, en vez de construir puentes, el presidente los dinamita.

El gobierno ha actuado poco en la crisis sanitaria y cuando lo ha hecho, ha creado más problemas que soluciones. El 3 de abril, el presidente de la Cámara de Diputados sentenció: “cada vez que el presidente aparece en público para criticar al ministro [de Sanidad], más que ayudar se interpone en el camino”. Esta opinión es compartida por el presidente del Senado, quien permaneció en cuarentena después de dar positivo por coronavirus. Este parece ser el sentimiento mayoritario, ya que un 54% de los brasileños, según una reciente encuesta de Datafolha, cree que el presidente Bolsonaro es un estorbo para la gestión de la pandemia.

En las últimas semanas y, como un producto derivado de esta crisis, se solicitaron al menos 10 peticiones de *impeachment*. Por ahora Maia, el presidente del Congreso que tiene la llave para iniciar el proceso de destitución, los ha denegado todos. El fantasma de Eduardo Cunha, el ex titular de la Cámara de Diputados, que traicionó en 2016 a Dilma Rousseff para iniciar el proceso de destitución, todavía sigue presente en Brasilia.

Fuera del Congreso, a través de una carta publicada el 30 de marzo, la oposición unida por medio de tres ex candidatos presidenciales, los presidentes de seis partidos progresistas y otros líderes de centroizquierda brasileños, pedían la renuncia de Bolsonaro, acusándolo de ser “incapaz” de afrontar la crisis provocada por el COVID-19 y de gestionar de forma “irresponsable” la pandemia: “¡Basta! Bolsonaro es más que un

problema político, se volvió un problema de salud pública... Debería renunciar”, dice el texto firmado, entre otros, por los ex candidatos Fernando Haddad y Ciro Gomes, que terminaron en segundo y tercer lugar en la elección presidencial de octubre de 2018, además de los líderes de los partidos de los Trabajadores (PT), Socialista Brasileño (PSB), Democrático Laborista (PDT), Socialismo y Libertad (PSOL), Comunista del Brasil (PCdoB) y Comunista Brasileño (PCB).

Bolsonaro y Mandetta

La relación entre Bolsonaro y su ministro de Sanidad no ha sido nada fácil. Luiz Henrique Mandetta, como profesional de la salud, ha defendido medidas de aislamiento, lo que le ha llevado a sufrir diversas reprimendas públicas del presidente. En contraposición con la disminución de popularidad de Bolsonaro, su figura ha ido creciendo frente a las presiones negacionistas del presidente a medida que aumentaban los infectados. “Vamos a guiarnos por la ciencia”, suele insistir Mandetta, médico de 55 años, de una extensa familia de políticos y diputado durante dos legislaturas. El 2 abril, en medio de la disputa, Bolsonaro declaró en una entrevista: “Mandetta quiere ir muy a su aire. Quizá tenga razón. Puede ser, pero le falta un poco más de humildad para liderar a Brasil en este momento difícil”. El ministro respondió, sereno pero duramente: “él tiene el mandato popular, y quien tiene un mandato popular habla, y quien no lo tiene, como yo, trabaja”.

Mandetta sabe lo que dice, ya que al país todavía le aguarda una dura realidad. Esta viene de la mano de la previsión del pico de la pandemia para mayo próximo, la reducción de más de 45.000 camas en el sistema público/SUS en la última década y de la importante falta de médicos y de suministros, junto con la previsión de colapso del sistema hospitalario para fines de abril. La conclusión es que en la mayor parte del país faltarán camas, especialmente en las UCI, a la vez que ventiladores mecánicos. Por eso, muchos estados ya han empezado a montar hospitales de campaña, como Rio de Janeiro en el icónico estadio de Maracanã.

Había rumores de que la salida del ministro de Sanidad sería inminente, pero el 7 de abril fue confirmado en el cargo aunque todavía con mucho malestar con Bolsonaro, quien al final acabo destituyéndolo a Mandetta el pasado 16 de abril. Algunas encuestas, como la Datafolha del 3 de abril, muestran que la aprobación de la gestión del Ministerio de Sanidad ante la crisis subió al 76%, más del doble que la de Bolsonaro (33%). Otros comienzan a especular con una posible candidatura presidencial conjunta para las elecciones de 2022. La encabezaría el también muy popular ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, y Mandetta iría como vicepresidente. Esta candidatura sería muy viable, porque Mandetta pertenece al mismo partido, el DEM, al que pertenecen los presidentes de ambas cámaras, Maia y Alcolumbre.

Al igual que sucede con Doria, el coronavirus ha transformado a Mandetta en una figura de popularidad exponencial, improbable en otra situación. El cambio de postura del ministro durante esta crisis ha sido notable. Si en sus inicios se presentaba de traje y era un firme defensor de la medicina privada, ahora ha pasado a exhibirse en mangas de camisa y siempre con un chaleco del SUS. De este modo, Mandetta está jugando sus cartas ante la opinión pública.

Bolsonaro y la prensa

Este es otro punto de crispación constante de Bolsonaro, inspirado en su continua manía persecutoria. Para el presidente, la prensa está llena de izquierdistas y comunistas (“rojos”). Sus comparencias ante los periodistas siempre están llenas de insultos homofóbicos, machistas, racistas y trato vejatorio a quienes tiene enfrente, calificando a la prensa de “sucias”, “asquerosas”, “canallas” e “inmorales” y amenazando incluso con asfixiarla económicamente. Sus ataques casi diarios a los medios son moneda corriente desde que llegó al poder. Una de sus primeras medidas fue anular la suscripción de su gobierno al diario *Folha de São Paulo* (uno de los más prestigiosos y el más grande del país). Sus agresiones a la prensa han incluido todo tipo de insultos, siendo uno de los últimos y más graves el sugerir que una conocida periodista, Patrícia Campos Mello, quien destapó el escándalo de los mensajes ilegales de WhatsApp por ciertas empresas que habían apoyado a Bolsonaro durante la campaña electoral de 2018, había ofrecido sexo a cambio de información.

En tiempos del COVID-19, con la prensa jugando un papel clave en la diseminación de la información, sus ataques se mantienen. En marzo, según la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), hubo 21 ataques del presidente, sólo en relación con la cobertura del coronavirus. Estos fueron solamente una pequeña parte de las docenas de ataques de Bolsonaro en el primer trimestre del año. Desde enero, el seguimiento que realiza la FENAJ indica que ha habido un total de 141 episodios en los que el presidente se ha pronunciado en contra del periodismo, insistiendo que la crisis del coronavirus es “mucho fantasía”.

El primer caso oficial fue comunicado el 26 de febrero, mientras que a 11 de abril los datos oficiales contabilizan 1.074 muertes de un total de 19.943 infectados, con un índice de letalidad del 5,3%, uno de los más altos de la región. En este contexto el Ministerio de Sanidad estima que la no notificación de contagiados y muertos es enorme (se cree que hay cerca de un caso testado para cada 10 infectados), mientras que la estrategia política de Bolsonaro retrata al periodismo profesional como un aliado de los gobernadores y parlamentarios, en una supuesta misión para perseguirlo directamente. A su vez, la prensa responde con duros editoriales. En su lucha contra los periodistas, que Bolsonaro calificó como “una raza en extinción”, vale recordar la máxima vigente en los medios de que “los presidentes van y vienen. El periodismo permanece”. Economía, Congreso, Poder Judicial, gobernadores y prensa: Bolsonaro se queda sin apoyos. Veremos que ocurre en los próximos *rounds*.

Bolsonaro y los militares

Entusiastas desde siempre de la candidatura Bolsonaro, los militares siguen siendo un importante pilar de sustentación de su gobierno. Además de los ocho ministros militares de un total de 22 (un total de 36,36% contra el 29,4% en Venezuela, donde las Fuerzas Armadas abandonaron su neutralidad para garantizar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder) y proporcionalmente con más presencia castrense que durante la dictadura militar (1964-1985), hoy el Palacio do Planalto está “militarizado”, con todos los asesores directos del presidente proviniendo de los cuarteles. En esta crisis, la mayoría de la cúpula militar ha manifestado públicamente su desacuerdo con la postura anticientífica del presidente.

En un pronunciamiento realizado minutos antes de Bolsonaro, el 24 de marzo, el comandante del Ejército, general Edson Pujol, contradiciendo el negacionismo presidencial, afirmó en un vídeo público que la crisis del COVID-19 “tal vez sea la misión más importante de nuestra generación”, frase que copió días después Bolsonaro cuando finalmente reconoció la gravedad de la pandemia. En palabras de Pujol: “vivimos el enfrentamiento de una pandemia que exige la unión de todos nosotros, brasileños. El momento es de cuidado y de prevención, pero también de mucha acción por parte del Ejército”. El pronunciamiento mostraba la gravedad con que la crisis del coronavirus estaba siendo tratada por el Ejército. De forma clara a la vez que sutil, Pujol dejaba claro que no concordaba con las declaraciones hechas por Bolsonaro.

En una acción definida por muchos como una intervención indirecta, el recién nombrado ministro de la Casa Civil, el general Braga Netto, ganó un inédito protagonismo en la crisis, ocupando la función que, ante la inactividad de Bolsonaro, algunos informalmente denominan como “jefe del Estado-Mayor del Planalto”. En este momento, a los militares no les interesa asaltar directamente el poder, como en 1964. Gozan de un elevado grado de autonomía e influencia y sus programas estratégicos han sido mantenidos en un contexto de restricción presupuestaria. Asimismo, sus jubilaciones tempranas y sus sueldos generosos se mantuvieron en la reforma de pensiones de 2019. Hasta ahora, Braga Netto había sido jefe del Estado-Mayor del Ejército (EME), comandante de la intervención federal de carácter militar en Rio de Janeiro durante 2018 y quien mejor conoce los vínculos de la familia Bolsonaro con las milicias cariocas.

En un estudio realizado por el CEEEx (Centro de Estudios Estratégicos del Ejército), alto órgano del EME y publicado en abril, los militares indican que la estrategia a seguir debe ser la de los test masivos, actuar rápidamente para aislar nuevos infectados e intentar mantener el aislamiento de los grupos de riesgo, así como indican salidas para cuando el país decida relanzar la economía. Hoy el Ejército está planteando estrategias que debería formular el presidente. El hecho es que la silla presidencial parece cada vez más grande para Bolsonaro.

Conclusiones

En un escenario turbio y movedizo como el brasileño es difícil predecir el futuro de Bolsonaro. No obstante, a pesar de su creciente impopularidad, según los datos de la encuesta XP Inversiones, para finales de marzo, un 30% de los brasileños califican la gestión de Bolsonaro como buena/óptima, frente al 37% que la consideran mala/pésima. El presidente mantiene su núcleo de apoyo fiel de un tercio estable a lo largo del tiempo. Además, cuenta con una parte significativa del apoyo del segmento empresarial, los evangélicos (cerca de 70 de los 210 millones de brasileños) y los militares, que por ahora y pese a las divergencias, no apoyan su destitución. Se han abierto importantes fisuras en el mandato del ex capitán, pero con consecuencias todavía inciertas.

Al comienzo de este análisis destacábamos lo que parecía ser un punto de inflexión en la retórica bolsonarista, pero, aparentemente, fue algo meramente táctico. En sus redes sociales, el día 5 de abril, Bolsonaro invitaba a un ayuno religioso nacional para que el país superase la crisis provocada por la pandemia. La ciencia y la planificación todavía están lejos de asumir el protagonismo que demanda el COVID-19. El negacionismo del

presidente y sus hijos llevó incluso a abrir una peligrosa crisis diplomática con China, con quien Brasil tiene su mayor superávit comercial, después de que Eduardo Bolsonaro dijese, en las redes sociales, que el COVID-19 era un “virus chino”.

A esta provocación, el cónsul chino en Rio de Janeiro, Li Yang, respondió con una durísima carta pública: “¿eres realmente tan ingenuo e ignorante?... Sería más prudente no crear más confusiones... China nunca quiso y no quiere crear enemistad con ningún país. ¡Sin embargo, si algún país insiste en ser enemigo de China, nosotros seremos su enemigo más cualificado!”. La mala gestión de la crisis continúa haciendo daño al país y su imagen exterior. Incluso las redes sociales más importantes (Twitter, Facebook e Instagram) han llegado a borrar mensajes de Bolsonaro por violar los términos legales sobre noticias falsas.

Durante estos días, en los que ha habido innumerables especulaciones acerca de un posible *impeachment*, ha crecido la estatura política del vicepresidente Hamilton Mourão, quien ha defendido la apuesta por el “confinamiento” ante la pandemia frente a las declaraciones de Bolsonaro: “la posición de nuestro gobierno por ahora es una sola, el aislamiento y el distanciamiento social”, dijo el general Mourão. Así, Mourão, Mandetta y Doria son personajes que se fortalecen de la debilidad de Bolsonaro ante la pandemia.

Según algunos analistas, la crisis del coronavirus puede acabar siendo la tumba del presidente de Brasil. No en el corto plazo (todo el empeño va a estar puesto en superar la pandemia durante los próximos meses) sino después, cuando el centro de atención gire hacia las actitudes asumidas a lo largo de esta crisis por los gobernantes y se vean las consecuencias para el país tanto desde un punto de vista económico como social. Por ahora, el 55% de los brasileños están en contra de su renuncia (según una encuesta de Datafolha del 3 de abril). Entre los más insatisfechos están los jóvenes y los estudiantes, los más ricos, las mujeres, los trabajadores formales y los habitantes del Nordeste brasileño. En suma, el virus parece tener la capacidad de hacer daño más allá de la salud física de las personas.